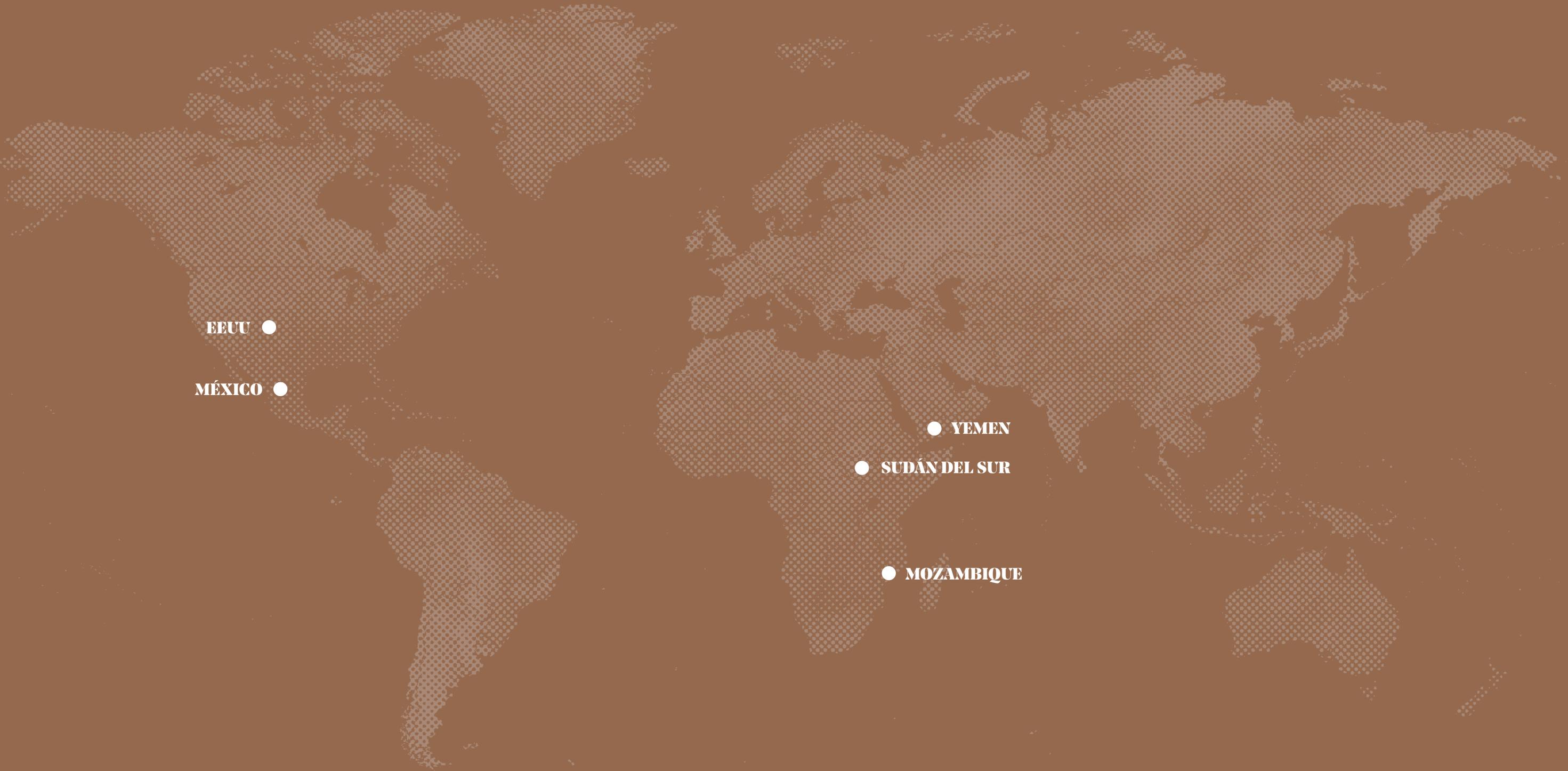


MATRIA



Judith Prat





EEUU ●

MÉXICO ●

● YEMEN

● SUDÁN DEL SUR

● MOZAMBIQUE

MATRIA

Edita

Gobierno de Aragón
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Presidente del Gobierno de Aragón
Javier Lambán Montañés
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
Felipe Faci Lázaro
Director General de Cultura
Víctor Lucea Ayala
Jefa del Servicio de Archivos, Museos y Bibliotecas
Laura Asín Martínez

Fotografías

Judith Prat

Textos

Judith Prat y Chema Conesa

Edición gráfica

Chema Conesa

Diseño y maquetación

Susana Blasco

Optimización digital

Joan Roig - Cromagnon Tv

ISBN 978-84-8380-431-5

D.L. Z 1665-2020

© de la edición, Gobierno de Aragón

© de los textos, sus autores

© de las fotografías, Judith Prat

Judith Prat

PRESENTACIONES

• 13 •

Judith Prat

• 15 •

Rosa María Calaf

• 19 •

Gobierno de Aragón



FOTOGRAFÍAS

• 21 •

Agroecología y feminismo

• 81 •

Usurpación de recursos y tierras

• 135 •

Jornaleros en frontera

• 177 •

Campo de batalla



ARTÍCULOS

• 222 •

Agroecología y feminismo: buscando un futuro global

• 226 •

El agronegocio y la gran minería:
la usurpación de recursos y tierras en Mozambique

• 230 •

Trabajadores agrícolas mexicanos, la fortaleza del campo en EEUU

• 234 •

Ser campesino si estalla la guerra

**A mis padres
que me enseñaron a amar la tierra.**

MATRIA es el reconocimiento de la tierra como única patria, la tierra en la que mi madre, mi padre, mis abuelas y todos mis antepasados hundieron las manos para alimentarnos, tal y como lo siguen haciendo 1200 millones de campesinos que en la actualidad alimentan al planeta. Es además un homenaje a la mujer campesina, corazón y motor de la agricultura familiar, que a lo largo y ancho del planeta, garantiza la soberanía y la seguridad alimentarias.

MATRIA es un grito de alerta ante las agresiones que sufre la madre tierra por parte de la agroindustria o la gran minería, pilares fundamentales de una economía especulativa que encuentra en la alimentación y la explotación salvaje de los recursos naturales ingentes dividendos. Es también un grito de socorro frente a las violaciones de los derechos humanos que sufre el colectivo campesino en el mundo.

En el epicentro de esta situación se encuentra la mujer, que sufre problemas añadidos como la dificultad en el acceso a la tierra, cuestión determinante que propicia una discriminación estructural (familiar, social y económica) que genera violencias específicas.

Tal es la trascendencia del problema del campesinado que en diciembre de 2018 Naciones Unidas aprobaba la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales.

Este trabajo fotográfico propone un relato visual de la realidad que la Declaración pretende proteger, desarrollando cuatro de los derechos más relevantes que encumbra y documentando situaciones en las que estos son violados en cinco escenarios distintos del planeta. También se aportan las huellas visuales de las alternativas propuestas desde la comunidad rural, con especial atención a aquellas protagonizadas por la mujer.



Judith Prat

Judith Prat y yo no nos habíamos cruzado en el camino personal o profesional hasta hace muy poco tiempo. Sorprendentemente, ya que nuestra senda ha recorrido, a menudo, los mismos lugares y se ha cruzado con las mismas vidas representadas por los protagonistas de las 128 imágenes repletas de miradas y de paisajes de la desigualdad y de la contradicción que nos interpelan desde las páginas de esta cuidada y sugerente publicación.

Al igual que antes lo hicieran múltiples retratos por el mundo de esta autora sin artificio, de certera observación, capaz de potente y estremecedora evocación y denuncia de la vida diaria tan injusta para tantos y que, un buen día, se comprometió con la fotografía documental de seres humanos anónimos, su maltratado vivir, su incansable lucha contra el abuso y por los derechos, las esperanzas y la dignidad.

Me unen, pues, muchas cosas con Judith y por eso y por su generosidad aparezco aquí. Coinciden nuestro archivo mental que guarda la memoria de lo visto prendida en nuestras retinas. Compartimos la pasión por una profesión de servicio o, más bien un oficio, el de visibilizar causas, exigir responsabilidades, propiciar preguntas, contar lo que le pasa a las gentes, pero, sin borrar, como es habitual, a las mujeres. Nos une la complicidad en la voluntad de contribuir a una construcción social más equitativa.

Es un gusto usar aquí la palabra para apoyar y agradecer su trabajo. Así mismo, para permitirme llamar la atención sobre la compleja y nada sencilla relación entre la justicia social y el fotoperiodismo. Género esencial para que no se nos escape la realidad.

Invito a disfrutar la minuciosa y sugestiva propuesta de esta fotoperiodista así como su lenguaje fotográfico propio, a veces hasta hipnótico, que te traslada al interior de circunstancias que debes conocer en México, en los Estados Unidos de América, en Mozambique, en Sudan del Sur, en Yemen. Rechaza toda retórica y despierta el sentido crítico, tan diluido en la presente sociedad del espectáculo, de lo banal y lo superfluo, lo inmediato y lo efímero, donde la información se convierte en entretenimiento, donde se han acortado las distancias, pero, no las diferencias.

Sus imágenes son puro relato. Auténticas instantáneas verbales. Atrapa un momento para contar una historia. En este caso, la del campesinado del mundo.

Nos exhibe un mosaico global de situaciones que incluyen el silenciado expolio propulsado por los intereses transnacionales de la agroindustria y la gran minería acaparadoras de tierras, que desplazan poblaciones, envenenan ríos, aplastan aspiraciones, provocan conflictos. No obstante, al mismo tiempo, la autora nos describe las alternativas de la agroecología y la fuerza del feminismo. Nos insinúa que otro mundo es posible.

Judith sabe captar el entorno que tiene entre manos, dedica tiempo a escuchar y esfuerzo para llegar a lo que algunos no le pueden contar y a lo que otros no le quieren mostrar. Pone a la persona en el centro del interés. Y, el énfasis en la mujer, en su visión, su parecer, su papel cimentador de la comunidad sin la que el cuadro de la realidad mundial estaría incompleto.

Tomar fotos puede que tenga unas reglas simples, pero, su aplicación no lo es en absoluto. Conseguir que la foto nos hable pocos y pocas lo consiguen. Combinar rigor y emoción requiere maestría.

La cámara no debe traer solo estilo y técnica, me dijo una renombrada voz del fotoperiodismo, sino también hacer que cobren vida los impulsos, los pensamientos, las fragilidades, en suma, que casi, casi se nos haga asistir al proceso creativo que conduce a la excelencia. Y, estoy convencida de que esto hace la cámara de Judith Prat. Con ella vemos, aprendemos y sentimos.

Matria es un ejercicio de empatía, de ética y de estética. De observación y documentación. Es grito de alerta y exigencia de socorro. Desenmascara y acusa. Nos lleva de viaje por el mundo en el que vivimos todos y del que todos somos responsables. Aunque se suele olvidar que la miseria y la escasez de unos tiene demasiado que ver con la opulencia y despilfarro de otros.

Este magnífico volumen llega a nosotros para romper la indiferencia y el silencio atronador ante la violación de los derechos humanos de los mujeres y hombres que nos alimentan. Nos ofrece un pasaporte al conocimiento. Captura una realidad vital que debe ser mostrada. Expone el contexto de imágenes que no por icónicas son bien comprendidas. Solo el saber permite entender. Con este libro en las manos ya no podremos decir “no lo sabía”. Mirar para otro lado se hace mas difícil.



Rosa María Calaf

En 2020 se ha cumplido el vigesimoquinto aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un texto de referencia sobre la necesidad de lograr la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y niñas en todo el mundo, aprobado en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. A día de hoy, y a pesar de los compromisos adquiridos, todavía sigue vigente esa necesidad de lograr dichos objetivos, una responsabilidad compartida que todos debemos asumir y en la que se deben emplear todos los recursos posibles.

Si consideramos la cultura como un conjunto de expresiones y manifestaciones artísticas, reflejo de la sociedad que las representa, debemos asumir que ese reflejo se ha visto condicionado por aquello que se ha considerado relevante socialmente a lo largo de la historia. Es evidente que a pesar de la imprescindible contribución de la mujer en la construcción de la cultura a través de la creación, producción e intervención artística, su reflejo a lo largo de la historia ha quedado oculto en muchas ocasiones por una sociedad patriarcal que ensalzaba un determinado modelo de masculinidad.

Atendiendo a estos principios, a través del lema *Cultura en igualdad: Mujeres en museos, archivos y bibliotecas*, desde la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón hemos llevado a cabo una serie de nuevas iniciativas con objeto de “fomentar la igualdad a través de las artes y la cultura, para luchar contra cualquier tipo de discriminación contra las mujeres”, dando cumplimiento a una de las medidas incluidas dentro de la línea estratégica de “Sensibilización y Prevención” que recoge el **IV Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Aragón (2018-2021)**.

Entre ellas se encuentra la realización de conferencias, exposiciones y actuaciones de difusión para conseguir la visibilización del papel de la mujer en nuestros centros culturales.

La exposición “Matria” de Judith Prat, que tuvo lugar en el IAACC Pablo Serrano ha sido una de ellas, y se ve complementada con la edición de esta publicación como muestra de una realidad que no nos debe dejar indiferentes.

**AGROECOLOGÍA
Y FEMINISMO.**

Muchas voces se han alzado en los últimos años para señalar que solo la agroecología en un marco de soberanía alimentaria puede configurar una alternativa firme que acabe con las crisis alimentarias provocadas por la alta especulación financiera y el aumento de los precios de los alimentos. Sin olvidar que muchas de las productoras locales en el mundo son mujeres: el motor de la agricultura familiar que garantiza la soberanía alimentaria.

Las campesinas en **MOZAMBIQUE**, a pesar de ser quienes producen los alimentos, no tienen los derechos sobre la tierra. De ahí que muchas de ellas se estén organizando en asociaciones y cooperativas vinculadas a la producción de alimentos ecológicos y a la recuperación de semillas autóctonas. Estructuras que les permiten tener el control de su trabajo en el campo.

En **MÉXICO**, la situación de las campesinas es similar. De gran parte del trabajo en el campo mexicano se encargan las mujeres, pero actualmente es casi imposible para ellas acceder a la titularidad de la tierra. En Chiapas defienden modelos ancestrales de cultivo como la milpa que complementado con las actuales prácticas en agroecología podría garantizar la seguridad alimentaria.











La actividad agraria en Mozambique es un sector altamente feminizado pues el 87,3% de las mujeres económicamente activas se dedican a la agricultura. Pero a pesar de ser quienes producen los alimentos, no tienen los derechos sobre la tierra, estos los ostentan sus maridos que toman las decisiones, comercializan los productos y se quedan con el dinero.





Si el marido fallece, la familia de él utilizará todas las tretas necesarias para arrebatarle las tierras a la mujer. Ellas se quedan con los hijos a su cargo y sin tierra que trabajar para poder sacarlos adelante.











La Unión Nacional de Campesinos está impulsando desde hace años la creación de cooperativas y asociaciones de campesinas, estructuras que les permiten defenderse frente del modelo y las prácticas sociales que pretenden alejarlas del control de su trabajo en el campo.

















En México más de un 50% de la tierra se rige por sistemas de propiedad social, ejidos o comunidades donde el núcleo de población es quien ostenta la propiedad. Chiapas es un buen ejemplo de estos sistemas que defienden modelos ancestrales de cultivo como la milpa que es considerada por muchos expertos como un ejemplo de la agroecología.



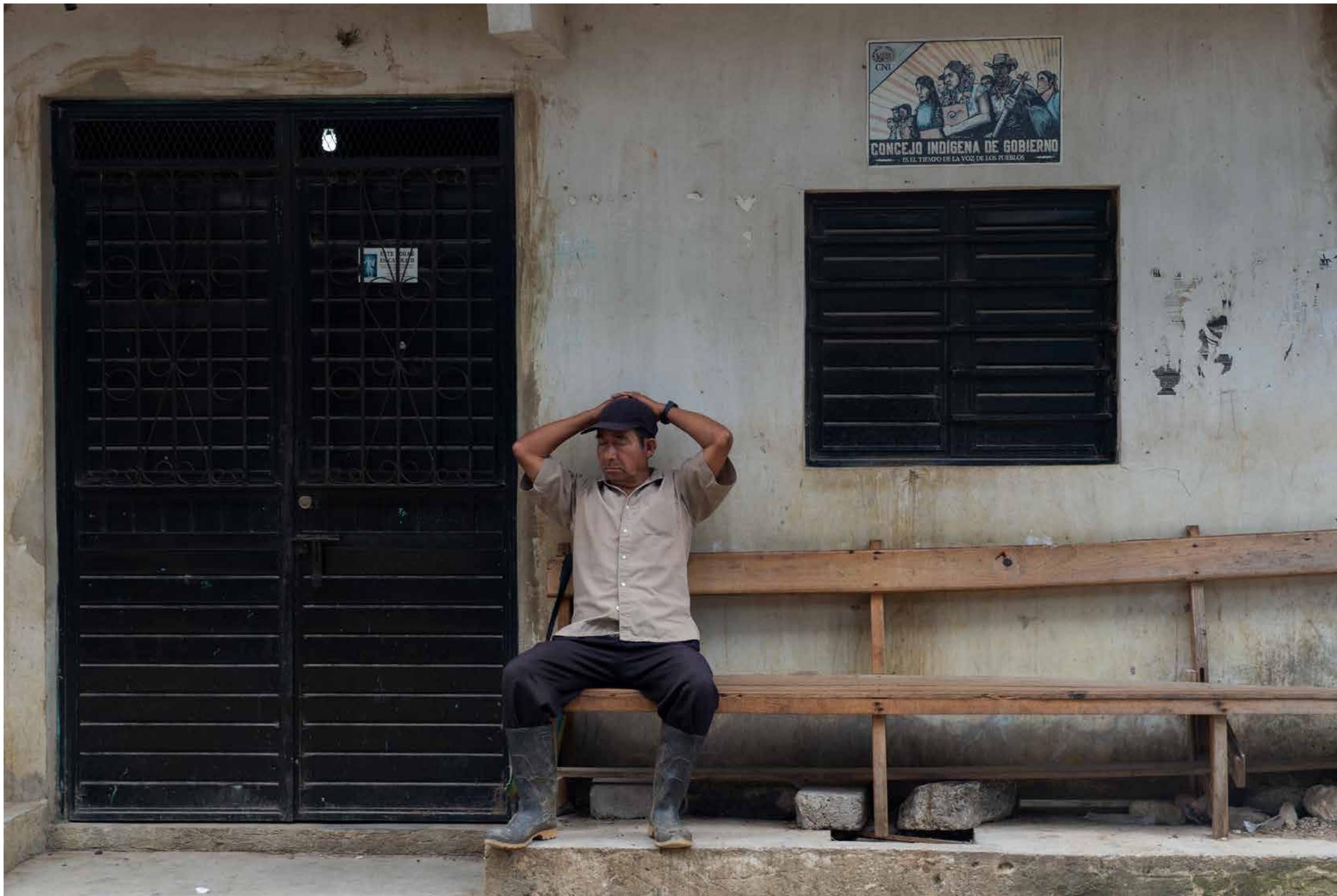


Los ejidatarios explotan pequeñas extensiones de tierra y existe una fuerte oposición a la implantación de la gran minería y a los sistemas agrarios neoliberales como el monocultivo de palma africana.









EL MOVIMIENTO DE LOS EJIDATARIOS DE TILA, CHIAPAS.

- ★ LA VIOLACION DE LOS DERECHOS Y LA CONSTANTE AMENAZA DE DESPOJO DE 130 HAS. DE TERRENO EJIDAL, POR EL AYUNTAMIENTO, QUE NO TIENE POSESION LEGAL.
- ★ EL CASERIO DEL POBLADO ESTA ASENTADA EN MEDIO DE TERRENOS EJIDALES DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS PRESIDENCIALES Y LOS ARTICULOS: 9, 29, 32, 33 Y 74 DE LEY AGRARIA EN VIGOR, ASI COMO LOS ART. 1, 2 EN SU FRACCION II, 74, 16 Y 39 DE LA CONSTITUCION, TAMBIEN EL CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, ARTICULO 21 DE LA CONVENCION AMERICANA, QUE DEBEMOS SER SALVAGUARDADO.

**ATENTAMENTE
TIERRA Y LIBERTAD
LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS DECLARA:
SU PROPIA AUTODETERMINACION Y SU DERECHO A AUTOGOBERNARSE.**

EJIDO TILA CHIS. 16 DE DIC. 2015.

LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2015.

LEVANTO UN ACTA SOBRE EL RETIRO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DE SUS OFICINAS A OTRO LUGAR DONDE SI TIENE FUNDO LEGAL, EL EJIDO TILA EJERCERA EL DERECHO DE SU **AUTONOMIA Y SU LIBRE DETERMINACION CON BASE AL ARTICULO: 2 EN SU FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA; PARA RESOLVER SU PROPIO CONFLICTO INTERNO.**

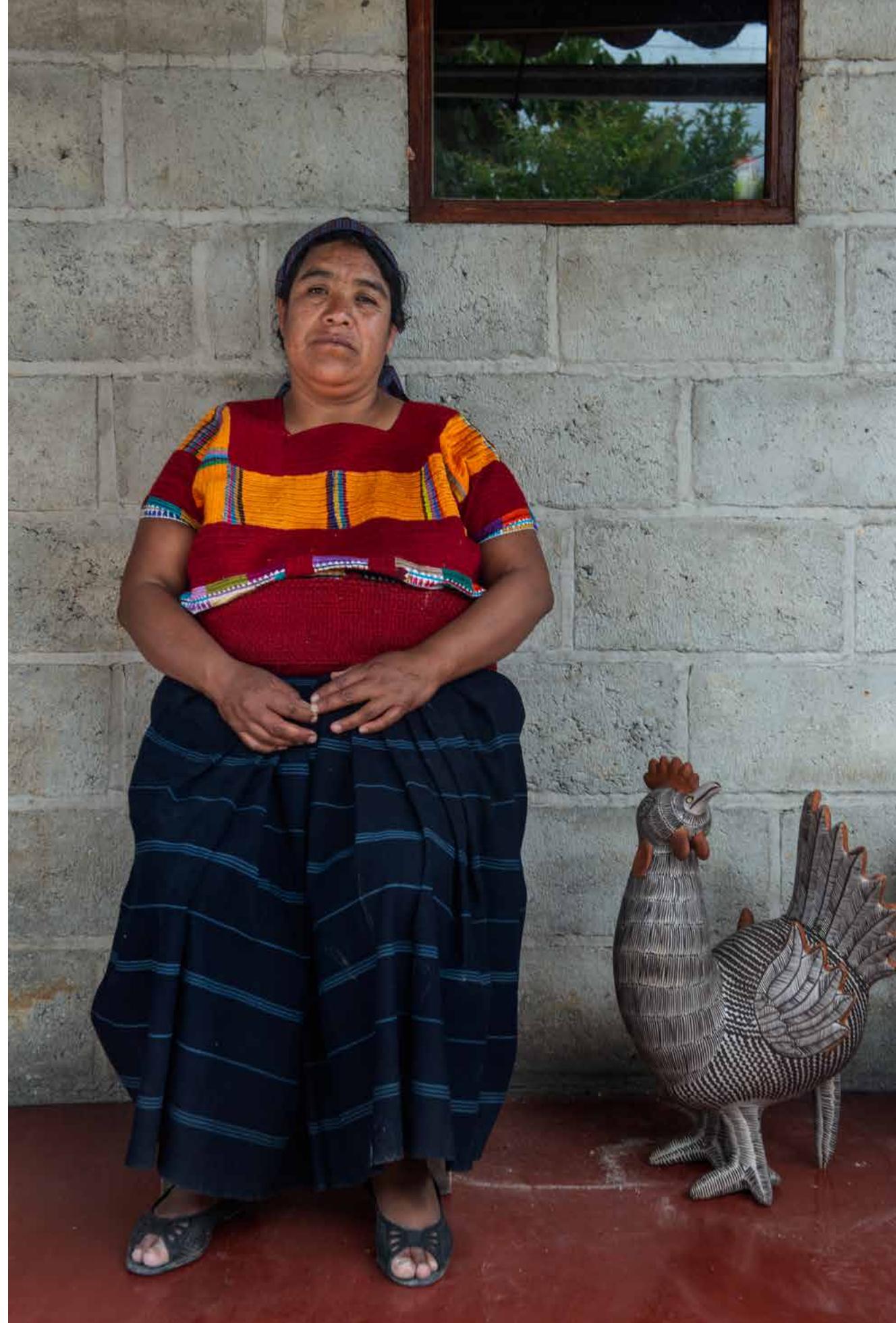
*Fila Chiapas 027 de agosto de 2018
Sección de Representantes*

- 1- Pase de lista
- 2- Quorum legal
- 3- Pobladores y OVE sin votar
- 4- 15 de Septiembre
- 5- Retirar quórum
- 6- Terminar el proceso

ORGANIZACION



Esperanza Hernández es una artista de origen tzeltal que vive y trabaja en Amatenango del Valle situado en la zona centro del estado de Chiapas, un lugar famoso por sus mujeres alfareras que heredan este oficio de sus propias madres para después transmitirlo a sus hijas.





Sus creaciones, de enorme belleza y cargadas de motivos mayas, son muy apreciadas en las grandes tiendas de diseño y decoración de la capital mexicana. El barro, los pigmentos naturales y la leña para la cocción se extraen de las tierras comunales del pueblo.









**USURPACIÓN
DE RECURSOS
Y TIERRAS.**

El 80%
de las personas que
sufren el hambre y la pobreza
en el mundo viven y trabajan en zonas
rurales y la población campesina se enfrenta a la violación de derechos básicos como el acceso al agua, al saneamiento o a una vivienda digna.

En **MOZAMBIQUE**, el fenómeno de la usurpación y el acaparamiento de tierras por parte de las grandes empresas agroalimentarias y las mineras ha provocado el desplazamiento de los campesinos y les ha abocado a la pobreza. El país se encuentra entre los 10 menos desarrollados del mundo.

Resulta difícil descifrar las opacas fórmulas de transacción bajo las que los gobiernos entregan los recursos africanos a las compañías trasnacionales para explotación de la tierra, el agua o los recursos mineros. La mayoría de estas concesiones se hacen sobre tierras que ya estaban siendo cultivadas por los campesinos locales lo que provoca la destrucción de los modelos de producción agrícola familiar y anula las posibilidades de supervivencia de la población rural.





En Mozambique el 78,5% de la población se dedica al sector de la agricultura, la pesca y la silvicultura. No obstante las élites políticas sirven en bandeja sus recursos a los intereses extranjeros en lugar de prohibir la especulación y hacer negocio con aquello que les alimenta y les da de comer.





El fenómeno de la usurpación de tierras por parte de las grandes empresas agroalimentarias y las mineras ha abocado a muchos campesinos al hambre y a la pobreza. Se fuerzan los desplazamiento de la población, los reasentamientos en lugares alejados y reciben tierras baldías a cambio de las usurpadas.







Algunas comunidades quedan atrapadas dentro de las concesiones mineras. Muchos de sus habitantes son reasentados a kilómetros de allí, pero quienes optan por quedarse tienen cada vez más difícil el acceso al pueblo, sufren la contaminación que provoca la extracción del carbón en la mina y se quedan sin tierras de cultivo y pastos.





D10

D10

JIN-3001

JINDAL AFRICA

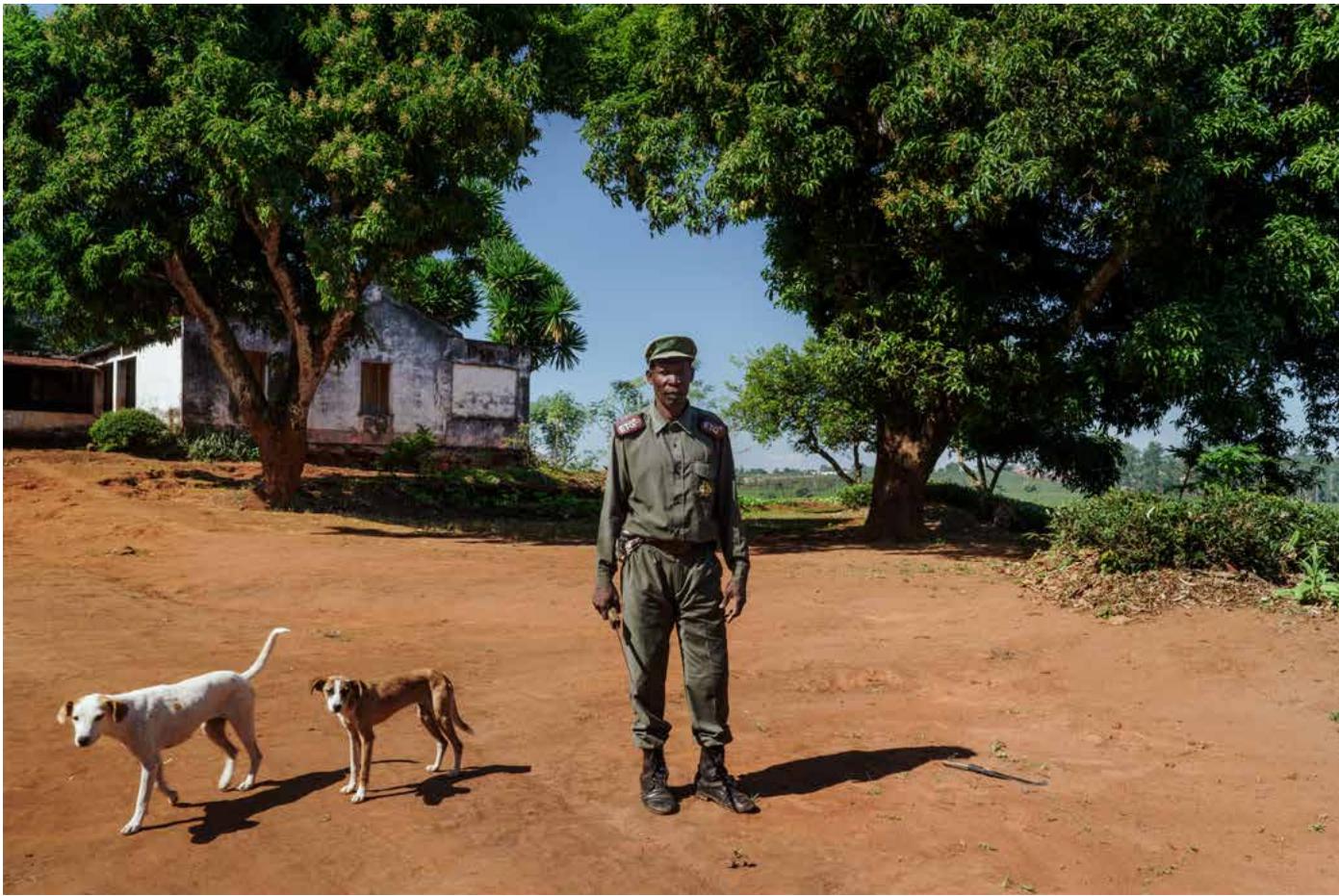














La empresa adjudicataria de 2000 hectáreas en la comunidad Ruace se comprometió a canalizar el agua desde la montaña hasta el pueblo, a mejorar los accesos a la comunidad o a comprar una ambulancia para el centro médico. Ocho años después la empresa no ha cumplido sus compromisos y la población trata de sobrevivir cultivando en un territorio estéril mientras ven como sus fértiles campos son explotados para la soja por la multinacional.

















La comunidad pesquera de Hori se está viendo afectada por las ampliaciones de una explotación minera. Las arenas minerales que extraen salen al mar por su zona de pesca. Han pedido la construcción de una escuela y un hospital como compensaciones por la pérdida de tierras cultivables y la contaminación de sus aguas, pero la compañía se niega.







AMBROZIO ARMAZIA
FALECEU EM 4-89



**JORNALEROS
EN FRONTERA.**

Aproximadamente 73% de los trabajadores agrícolas del campo estadounidense, son inmigrantes y la gran mayoría de ellos procede de MÉXICO. Según los datos oficiales y los proporcionados por distintas organizaciones, hasta un 70% de estos trabajadores son inmigrantes sin permiso de trabajo, lo que supondría que entre 1,1 y 1,7 millones de trabajadores lo hacen en situación irregular.

Este fenómeno de migraciones y desplazamientos de los trabajadores del campo no es exclusivo de la frontera estadounidense. Existe un flujo internacional de mano de obra que ha venido a sumarse al de los productos y los capitales.

La protección de los derechos humanos de estos trabajadores, así como un marco de trabajo legal que garantice condiciones laborales y salarios dignos evidencian el nivel democrático del país receptor y sin duda favorecen la cohesión social, ya que contribuyen a erradicar la desigualdad y la discriminación.





Las calles del centro de El Paso son un ir y venir de jornaleros, contratistas y capataces durante toda la madrugada. En cada esquina grupos de trabajadores mexicanos esperan a que las furgonetas o autobuses de los ranchos pasen a buscarlos para trabajar en fincas que pueden estar ubicadas a varias horas de allí. En el campo les aguarda una larga jornada de trabajo, que comienza antes de salir el sol, y duras condiciones laborales.













La recogida del chile jalapeño es especialmente complicada pues se trata de una variedad muy picante y cuando sale el sol y aprieta el calor deben protegerse la cara y las manos para evitar daños en la piel y los ojos. Del ritmo apresurado que consigan mantener para llenar los botes y la calidad de la cosecha dependerá su salario, que fluctúa entre los 60 y los 100 dólares al día.









Al terminar la jornada todavía queda aguardar largas filas hasta llegar al todoterreno del contratista que, a pie de campo, se encarga de liquidar el salario diario a todos los jornaleros.











Irma vive en Ciudad Juárez y todos los días sale de su casa a las 2 de la madrugada para cruzar la frontera y tomar el autobús que la lleva a un rancho de Garfield a más de 150 km de distancia. Cuando Irma regresa a casa por la tarde solo tiene fuerzas y tiempo para ducharse y cenar antes de acostarse. Es su marido Gustavo el que se ocupa de todo en la casa, también de su hijo Marcos de 27 años que sufre una grave discapacidad física.





NINTH AVE 200

OREGON ST 1000

NO
OPEN CONTAINERS
AND CONSUMPTION
OF ALCOHOLIC
BEVERAGES PROHIBITED
MUN. ORD. 506170

ONE
WAY
→

STOP

STOP

CESAR CHAVEZ BL

375
←

100
USA
VALDES
LOWE
&
ASBROS
2006



Mario es un joven de 19 años que llegó de Sinaloa. Comparte un pequeño apartamento de una única habitación con otros dos jornaleros en el Paso. Ninguno de ellos tiene regularizada su situación en EEUU por eso trabajan sin contrato ni seguro. No tienen contacto con los rancheros, son los contratistas los que les ofrecen el trabajo diario.





Eliazer trabaja casi todo el año en los ranchos de Nuevo México recogiendo chile, cebolla, lechuga o arreglando la tierra. Tiene estatus de residente permanente en los EEUU y durante la semana se aloja en el Centro de trabajadores agrícolas fronterizos de El Paso. Solo el domingo regresa a Ciudad Juárez para pasar el día con su familia.

**CAMPO
DE BATALLA.**

Dos tercios de las personas que padecen hambre aguda en el mundo se encuentran en países carcomidos por conflictos armados. En el epicentro de esta violencia, el campesinado, que ve convertido su trabajo en objetivo, y su territorio, en campo de batalla. Yemen o Sudán del Sur son ejemplos claros de estas circunstancias.

YEMEN padece una hambruna devastadora. Según Naciones Unidas se trata de la peor crisis humanitaria del planeta en los últimos cien años, con trece millones de personas en riesgo de inanición. Los dos bandos en pugna han privado a la población yemení de su derecho al acceso a medicinas, agua y comida. Se ha utilizado, por tanto, el hambre como arma de guerra.

Una suerte similar sufre **SUDÁN DEL SUR**. La violencia generalizada y el desplazamiento continuado en estos años de guerra han perjudicando especialmente las actividades agrícolas, han restringido el acceso a los campos y han destruido la economía de subsistencia de la mayoría de los hogares. Además, una parte importante de la población vive en áreas con presencia de minas terrestres, lo que provoca un gran riesgo para los habitantes de las zonas rurales, que deben cultivar campos o circular por caminos plagados de minas.





Tras seis años de guerra Yemen sufre una hambruna devastadora, la peor crisis humanitaria del planeta en los últimos cien años, según Naciones Unidas, con trece millones de personas en riesgo de inanición. La alimentación se ha utilizado como arma de guerra en el que ya era el país más pobre de Oriente Medio antes del inicio del conflicto.







Los campesinos del norte del país han denunciado los ataques sobre sus granjas, campos y cosechas imposibilitando la producción local y dificultándola a futuro por la alta toxicidad que provocan los bombardeos sobre la tierra. Esto les obliga a huir de sus hogares.











En la pequeña ciudad de Lahj, un hospital sin personal médico ni medicinas acoge a los enfermos de la zona. Es el propio director del hospital el que recorre las habitaciones visitando a los enfermos, muchos de ellos niños atendidos por sus madres.



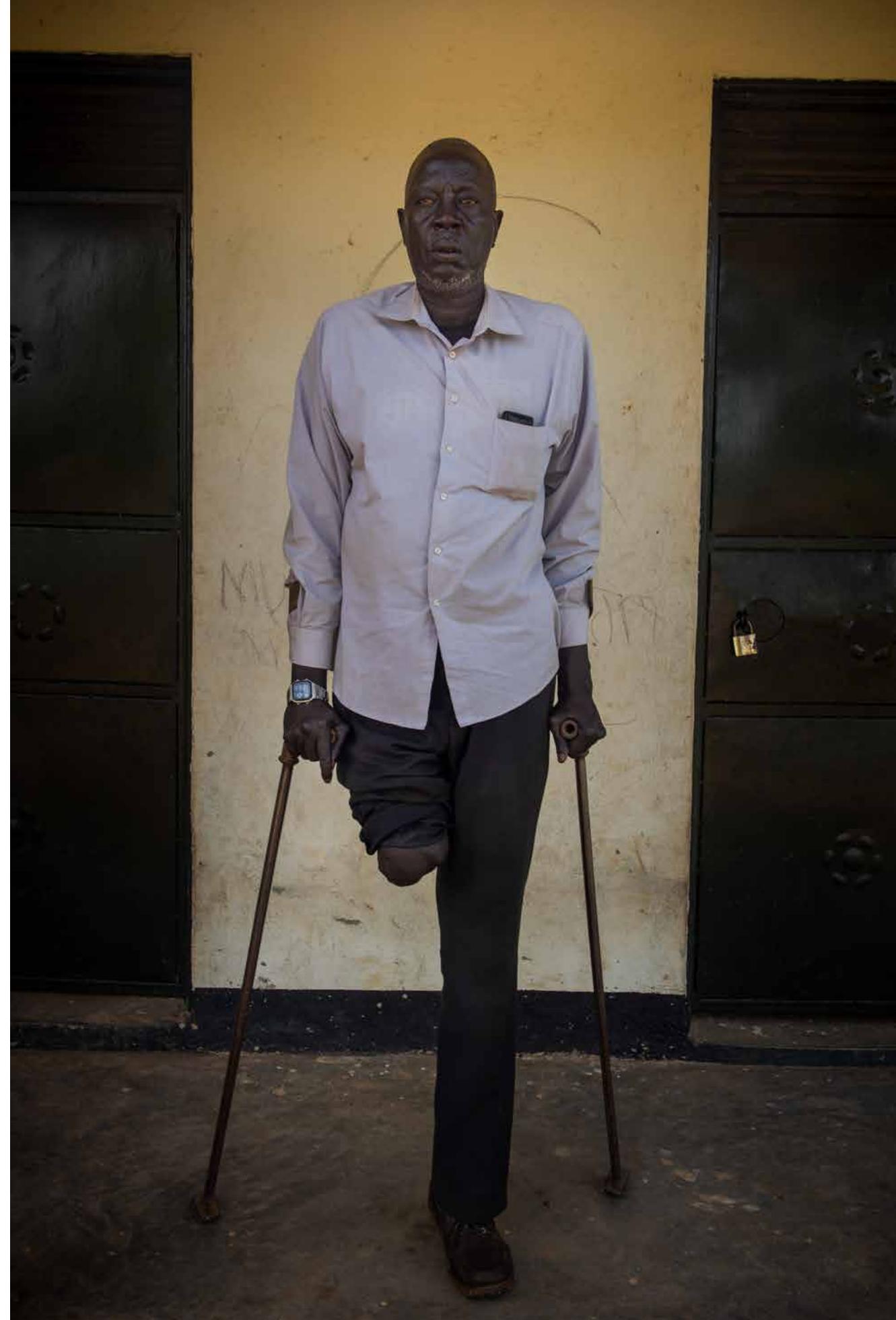


La desnutrición infantil es una constante en todo el país. Tres millones de niños y mujeres embarazadas sufren desnutrición aguda y según las organizaciones internacionales 85.000 niños han muerto por inanición.





En Sudán del Sur, tras décadas de conflicto, se estima que seis millones de personas viven en áreas con presencia de minas terrestres y restos explosivos de guerra. Esto supone un enorme riesgo para los habitantes de las zonas rurales que deben cultivar campos o circular por caminos plagados de minas.













Agroecología y feminismo: buscando un futuro global.

La crisis alimentaria de 2007 y 2008 provocada por la alta especulación financiera supuso el aumento internacional de precios de los alimentos a niveles nunca conocidos antes. Los países con un alto déficit productivo sufrieron de manera especial y la crisis golpeó a sus pequeños productores, agravando las situaciones de pobreza y desnutrición de millones de hogares rurales y urbanos.

Los efectos se dejaron sentir especialmente en África que representa aproximadamente un tercio de las importaciones mundiales de arroz y trigo y multitud de conflictos sociales se desataron en estos años en los países más afectados.

A pesar de que algunos organismos multilaterales plantearon en ese momento la necesidad de fortalecer la producción nacional de alimentos, resultaron ser propuestas poco consistentes que nunca llegaron a consolidarse. Las decisiones políticas posteriores siguieron la senda ya iniciada años antes por muchos gobiernos africanos que cambiaron las leyes, entregaron tierras y ofrecieron beneficios fiscales a las empresas del agronegocio para atraer inversiones.

Una estrategia que no ha funcionado ya que la sobreproducción de alimentos por parte de la agroindustria no se ha traducido en una garantía del derecho a la alimentación en el continente. Al contrario, este modelo ha agotado la fertilidad del suelo, contaminado la tierra con agrotóxicos, despreciado las semillas locales, deforestado importantes áreas rurales y destruido recursos acuíferos.

En definitiva, este modelo de mercantilización de los recursos naturales empobrece a las comunidades y a las explotaciones agrícolas familiares, expulsa a los campesinos de sus tierras y, lejos de ser una solución, no ha hecho más que favorecer las múltiples crisis climática, alimentaria, o de salud pública entre otras.

Muchas voces se han alzado en los últimos años para señalar que solo la agroecología en un marco de soberanía alimentaria y el apoyo de los gobiernos a la producción y los mercados locales pueden configurar una alternativa firme que acabe con estas crisis; sin olvidar que la gran mayoría de las productoras locales en África son mujeres.

En Mozambique uno de los países del continente donde más estragos están causando las políticas favorables al agronegocio y donde se está permitiendo el acaparamiento de tierras por parte de multinacionales agrarias y la gran minería, están surgiendo paralelamente multitud de iniciativas de agroecología, muchas de ellas lideradas por campesinas.

Ana Paula Taucale, presidenta de la Unión Nacional de Campesinos de Mozambique (UNAC) hasta 2019 y campesina ligada a las luchas sociales de su país desde los ochenta, cuenta que llevan 25 años formando a las mujeres rurales en liderazgo. La actividad agraria en Mozambique es un sector altamente feminizado pues el 87,3% de las mujeres económicamente activas se dedican a la agricultura. Pero a pesar de ser quienes producen los alimentos, no tienen los derechos sobre la tierra, estos los ostentan sus maridos que en muchas ocasiones ni siquiera se dedican a la agricultura.

Las mujeres trabajan la tierra, pero las decisiones las toman sus maridos que son además quienes comercializan los productos y se quedan con el dinero. Si el marido fallece, la familia de él utilizará todas las tretas necesarias para arrebatarse las tierras. Las mujeres se quedan con los hijos a su cargo y sin tierra que trabajar para poder sacarlos adelante.

Por eso desde hace décadas la UNAC está impulsando la creación de cooperativas y asociaciones de campesinas, estructuras

que les permiten defenderse frente del modelo y las prácticas sociales que pretenden alejarlas del control de su trabajo en el campo. Cooperativas vinculadas a la producción de alimentos ecológicos, a la recuperación de semillas autóctonas y donde las mujeres comercializan los productos. Estas iniciativas suponen una alternativa interesante al agronegocio, pero es necesario el apoyo del gobierno a este modelo facilitando las inversiones y la modernización de la agricultura familiar y abriendo nuevos mercados para estas productoras.

La dificultad de acceso a la tierra por parte de las campesinas y otras discriminaciones que sufren las mujeres rurales en todo el mundo es una realidad que no ha obviado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

La Declaración establece que los Estados adoptarán las medidas apropiadas para erradicar todas las formas de discriminación de las campesinas, para promover su empoderamiento de manera que puedan disfrutar plenamente, en pie de igualdad con los hombres, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y obrar por el desarrollo económico, social, político y cultural del ámbito rural, participar en él y aprovecharlo con total libertad. Y señala de manera específica su derecho a acceder en condiciones de igualdad a la tierra y los recursos naturales y a obtener un trato igual o prioritario en las reformas agrarias y los planes de reasentamiento.

Qué duda cabe de que las dificultades añadidas que soporta la mujer, como los problemas de acceso a la tierra, propician situaciones de discriminación estructural (a nivel familiar, social y económico), que genera violencias específicas. Por ello la Declaración señala también de manera con-

tundente el derecho de las mujeres a estar protegidas de todas las formas de violencia.

La dimensión global de la desigualdad a la que se enfrenta la mujer campesina, así como sus propuestas para una agricultura distinta nos lleva a encontrarnos con situaciones similares en lugares muy dispares.

En México más de un 50% de la tierra se rige por sistemas de propiedad social, ejidos o comunidades donde el núcleo de población es quien ostenta la propiedad.

Chiapas es un buen ejemplo de estos sistemas. Los ejidatarios explotan pequeñas extensiones de tierra y existe una fuerte oposición a la implantación de sistemas agrarios neoliberales y a la gran minería. Por el contrario, defienden modelos ancestrales de cultivo como la milpa adaptados a cada ecosistema y que es considerada por muchos expertos como un ejemplo de la agroecología. La milpa es un policultivo basado en el maíz que incluye, además, combinaciones de frijol, calabaza, chile, tomate verde y otras hortalizas. Un sistema de producción alimenticia que combinado con las actuales prácticas en agroecología ayudaría sin duda a garantizar la seguridad alimentaria y les devolvería a los campesinos la soberanía sobre los alimentos.

Del trabajo en la milpa y en gran parte de los cultivos en el campo mexicano se encargan las mujeres. Pero según datos del Registro Agrario Nacional, del total de 4,9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país, 3,6 millones son hombres. Es decir, ni siquiera 3 de cada 10 campesinos con derechos sobre la tierra son mujeres, a pesar de trabajarla y producir la mayoría de los alimentos.

Mercedes Oliveira antropóloga feminista y fundadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas explica que las leyes (como la

reforma agraria de 1992) y los usos y costumbres han ido quitando a las mujeres los derechos sobre la tierra, es casi imposible para ellas acceder a la titularidad y, en la actualidad, difícilmente pueden ser ejidatarias.

Muchas son las consecuencias de esta violencia patrimonial que las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad ya que no pueden acceder a créditos, ni participar en los órganos agrarios decisorios, son despojadas de las tierras que trabajan si enviudan, o difícilmente pueden separarse de sus maridos pues pierden el medio de vida y sustento.

Ellas que siempre han luchado por la tierra y ya en la revolución mexicana participaron activamente en los procesos de recuperación de tierras por parte del campesinado pero que tradicionalmente han sido y siguen siendo maltratadas e invisibilizadas.

El agronegocio y la gran minería: la usurpación de recursos y tierras en Mozambique.

La población campesina supone un tercio de la población mundial a la que alimenta pero, pese a ello, en pleno siglo XXI, el 80% de las personas que sufren el hambre y la pobreza en el mundo viven y trabajan en zonas rurales y el colectivo agrario se enfrenta a la violación de derechos básicos como el acceso al agua, al saneamiento o a una vivienda digna.

La situación que atraviesa la población rural y campesina a lo largo de los 5 continentes es uno de los exponentes más visibles de los estragos de la globalización económica y África es un escenario evidente de esta descarnada realidad.

En Mozambique el 78,5% de la población se dedica al sector de la agricultura, la pesca y la silvicultura. No obstante, el fenómeno de la usurpación de tierras por parte de las grandes empresas agroalimentarias y las mineras ha abocado a muchos campesinos al hambre y a la pobreza. El país se encuentra entre los 10 menos desarrollados del mundo y la pobreza se intensifica en las zonas rurales donde afecta al 72% de la población.

La apropiación de los recursos africanos se realiza a través de distintas y a menudo opacas fórmulas de transacción que hacen difícil conocer exactamente qué derechos se están entregando a las compañías del agronegocio. En el epicentro de algunas de estas oscuras transacciones facilitadas por los gobiernos (alquileres, ventas o concesiones) están los derechos de acceso y utilización del agua, elemento clave para la vida y lamentablemente también para el negocio.

La mayoría de las concesiones en Mozambique se han hecho sobre tierras que ya estaban siendo cultivadas por agricultores locales a los que se desplaza con engaños y presiones a zonas peores. Las élites políticas sirven en bandeja sus recursos a los intereses extranjeros en lugar de asegurar la supervivencia de la agricultura familiar y

prohibir la especulación y hacer negocio con aquello que les alimenta y les da de comer. Claro ejemplo de estas prácticas es el proceder de la empresa Hoyo Hoyo que tiene en su haber derechos de uso y aprovechamiento de tierras en Zambezia y en Tete por más de 20.000 hectáreas según asegura la organización Grain.

En 2012 había en la localidad de Ruace más de 800 agricultores locales trabajando unas 2000 hectáreas de las 3.500 que Hoyo Hoyo tenía intenciones de usar para plantar soja.

Teresa Salada, vicepresidenta de la Unión provincial de campesinos, cuenta como la empresa prometió compensaciones y nuevas tierras para el reasentamiento de los campesinos desplazados. Se comprometió a canalizar el agua desde la montaña Mulembo hasta el pueblo, a mejorar los accesos a la comunidad o a comprar una ambulancia para el centro médico. Ocho años después los habitantes de Ruace tienen que caminar durante 1 hora montaña arriba para conseguir agua potable o lavar la ropa. La empresa no ha cumplido sus compromisos y la población trata de sobrevivir sin las inversiones prometidas cultivando en un territorio estéril mientras ven como sus fértiles campos son explotados para la soja por la multinacional que planea poner en cultivo 3000 hectáreas más.

Teresa Salada cuenta que los campesinos de las vecinas comunidades ya no creen las promesas de las empresas tras ver como los han tratado a ellos, por eso no quieren negociar. Pero los expulsan igualmente de sus tierras. Por la noche labran los campos con su maquinaria y cuando los campesinos llegan a trabajar ya no tienen nada.

Si importante es el suelo mozambiqueño no lo es menos el subsuelo que cuenta con unas reservas de carbón estimadas de 23 mil millones de toneladas.

Alí Chaucate, abogado de la Asociación de apoyo y asistencia jurídica a las comunidades, habla de cómo el Estado ha dado concesiones a las grandes compañías mineras y lo ha hecho, en muchos casos, sin consulta previa ni realojo con garantías a sus pobladores tal y como exige la Ley de minas. Muchos pueblos han quedado atrapados dentro de las concesiones de las mineras.

Casoca es uno de ellos, enclavado dentro del territorio concedido a la minera Jindale Steel and Power Limited. Muchos de sus habitantes fueron reasentados a varios kilómetros, pero quienes optaron por quedarse tienen cada vez más difícil el acceso al pueblo, sufren la contaminación que provoca la extracción del carbón en la mina y se han quedado sin tierras de cultivo y pastos.

Situación similar padecen los habitantes de Bogamoyo en Moatize, cuyas viviendas están a escasos metros de la mina a cielo abierto que explota Vale SA. Las detonaciones son constantes y nunca se avisa a la comunidad que sufre los temblores y las nubes negras que provocan.

Quienes viven el reasentamiento no corren una suerte mejor. Es el caso de las 478 familias de Mualadzi que fueron reubicadas por la minera británica Rio Tinto. Les dieron una casa a 68 Kilómetros de su hogar y una parcela de tierra en la que no crece nada. Liliana Ruben, presidenta del comité de gestión de los recursos naturales de Mualadzi cuenta con rabia que sus antiguas tierras eran muy fértiles y obtenían rendimientos que les permitían sacar a la familia adelante, sus hijos podían ir a la universidad. Ahora apenas consiguen sacar de sus tierras alimentos para consumo propio.

Las concesiones mineras, los reasentamientos y el empobrecimiento de los campesinos se extiende a lo largo de toda la provincia. Mil kilómetros al este de allí, en la provin-

cia de Nampula, la compañía irlandesa Kenmare Resources tiene concesiones para la extracción de arenas minerales en Moma. Esta zona es rica en rutilo que procesado da lugar al titanio, un metal de gran valor por sus múltiples aplicaciones. La minera forzó el desplazamiento de 146 familias y les construyó casas en el nuevo asentamiento, pero todos perdieron sus tierras y a muchos de ellos no les dieron otras. Mientras asalariados llegados de Sudáfrica o Maputo trabajan en la mina frente a los ojos de quienes se han quedado sin nada y son despreciados incluso como mano de obra barata.

No lejos de allí la comunidad pesquera de Hori también se está viendo afectada por las ampliaciones de esta explotación. Las arenas minerales que extraen salen al mar por su zona de pesca y los nuevos accesos por carretera a la mina pasarán por sus tierras.

Han pedido compensaciones por la pérdida de tierras cultivables y la contaminación de sus aguas. En concreto exigen a Kenmare Resources 24.000 mts (unos 340 euros) por la pérdida de sus tierras y la construcción de una escuela, un hospital y abastecimiento de agua y luz, unas exigencias que están muy lejos de los 16.000 mts que está dispuesta a pagar la compañía por quedarse con sus parcelas. Las inversiones en la comunidad ni siquiera se contemplan.

La población local se siente humillada y quiere defender sus derechos, pero temen que si continúan oponiéndose usarán contra ellos la violencia. Prueba de ello es la presencia de hombres armados y de representantes de la administración provincial en las últimas reuniones que les coaccionan en favor de la empresa.

Mozambique, como la inmensa mayoría de naciones del planeta, incumple con dramáticos resultados los mandatos de las ONU y la recientemente aprobada Declaración sobre

los Derechos de los Campesinos y de Otras personas que trabajan en las zonas rurales que recoge de forma clara el derecho de los campesinos a la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra, al agua o las pesquerías y el derecho a estar protegidos contra todo desplazamiento arbitrario e ilegal que los aleje de su tierra o de su lugar de residencia habitual. La Declaración también recoge la limitación de la concentración y el control excesivo de la tierra a fin de garantizar su función social.

Lejos de seguir las indicaciones de la Declaración la política de concesiones mozambiqueña es un claro exponente de un modelo económico que viola sistemáticamente los Derechos Humanos incapaz de conciliar la generación de riqueza con la vida y el planeta. El resultado no es otro que el empobrecimiento de las comunidades que tiene su peor cara en la malnutrición infantil.

No es casual que el hospital de Moma, como muchos otros en zonas rurales de todo el país, se haya visto obligado a contar con un departamento para atender la desnutrición infantil. En algunas comunidades la mitad de los niños y niñas la padecen. Muchos son menores de 2 años y ya conocen los efectos del hambre heredada de sus madres embarazadas; de ellas que paradójicamente producían comida para alimentar al mundo.

Trabajadores agrícolas mexicanos, la fortaleza del campo en EEUU.

El campo de Estados Unidos se nutre principalmente de jornaleros mexicanos que, junto con los agricultores para los que trabajan, alimentan el país.

Si bien es cierto que muchos productores estadounidenses de las grandes zonas agrícolas votaron a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, pronto se dieron cuenta de lo perjudiciales que podían ser para sus intereses las políticas restrictivas de la inmigración anunciadas por el presidente.

No en vano, según la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas del Departamento de Trabajo de los EEUU, aproximadamente el 73% de los 2.4 millones de trabajadores agrícolas del campo estadounidense, son inmigrantes y la gran mayoría de ellos procede de México. La encuesta indica que el 47% de estos trabajadores son inmigrantes sin permiso de trabajo, aunque otras fuentes elevan esta cifra al 70% lo que supondría que entre 1.1 y 1,7 millones de trabajadores lo hacen en situación irregular.

La iniciativa de Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola aprobada en diciembre de 2019 por la Cámara de Representantes establecería, de aprobarse también en el Senado, un programa de legalización para trabajadores agrícolas indocumentados que hayan sido empleados en la agricultura de los EE.UU. Se trata de una ley que modernizaría todo el sistema de contratación, acabaría con la incertidumbre y el miedo con el que estos trabajadores viven y daría estabilidad a los productores en todo el país al proporcionarles una herramienta eficaz para la legalización de la situación de sus trabajadores temporales.

A la espera de ver lo que ocurre con esta ley que les podría garantizar un marco de trabajo legal y estable, muchos jornaleros mexicanos se enfrentan, con no pocas difi-

cultades, al día a día en el país vecino desde sus diferentes status migratorios.

Eliazer trabaja casi todo el año en los ranchos de Nuevo México recogiendo chile, cebolla, lechuga o arreglando la tierra. Tiene estatus de residente permanente en los EEUU y durante la semana se aloja en el Centro de trabajadores agrícolas fronterizos de El Paso. Solo el domingo regresa a Ciudad Juárez para pasar el día con su familia. Desde el Centro de Trabajadores, que ofrece un lugar para pernoctar y comida a bajos precios, sale todos los días a las tres de la madrugada para empezar a trabajar en el campo entorno a las cinco.

Las calles del centro de El Paso son un ir y venir de jornaleros, contratistas y capataces durante toda la madrugada. En cada esquina grupos de trabajadores esperan a que las furgonetas o autobuses de los ranchos pasen a buscarlos para trabajar en fincas que pueden estar ubicadas a varias horas de allí.

En el campo les aguarda una larga jornada de trabajo y duras condiciones laborales. La recogida del chile jalapeño es especialmente complicada pues se trata de una variedad picante y cuando sale el sol y aprieta el calor deben protegerse la cara y las manos para evitar daños en la piel y los ojos. Además deben trabajar a buen ritmo pues el salario diario depende del número de botes de chile recogido y nadie en el grupo puede quedarse atrás para no retrasar a los tractores donde se van vaciando los botes. Al terminar la jornada todavía queda aguardar largas filas hasta llegar al todoterreno del contratista que a pie de campo se encarga de liquidar el salario diario a todos los jornaleros.

Eliazer conoce bien la dureza de este trabajo, sobre todo cuando vas cumpliendo años, pero con esfuerzo consigue ganar entre 60 y 90 dólares al día que le permiten mantener a su familia en Ciudad Juárez.

Diferente situación es la que tiene Mario un joven de 19 años que llegó a EEUU hace 5 desde Sinaloa. Comparte un pequeño apartamento de una única habitación con otros dos jornaleros en el Paso. Sin permisos en regla y por lo tanto sin contrato ni seguro cuenta que no tiene contacto con los rancheros, son los contratistas los que le ofrecen el trabajo y al final del día cobra. La mano de obra joven siempre es bienvenida pues son capaces de recoger mayores cantidades de chile durante la jornada laboral. Por cada bote recolectado reciben una ficha y la suma de todas ellas, al final del día, se convertirá en su salario. En el rancho en el que trabaja pagan 90 centavos por bote y puede llegar a ganar 110 dólares al día trabajando duro. Afirma que la mayoría de sus compañeros están en el país de forma irregular o con visas de turista y a pesar de eso no tienen demasiados problemas para trabajar en las fincas cercanas a El Paso.

Aunque algunos agricultores no quieren contratar mujeres, son muchas las que como Irma trabajan piscando chile o tapeando cebolla en Texas y Nuevo México. Irma vive en Ciudad Juárez y todos los días sale de su casa a las 2 de la madrugada para cruzar la frontera y tomar el autobús que la lleva a un rancho de Garfield a más de 150 km de El Paso. Aunque nació en México tiene la nacionalidad estadounidense pues su madre era ciudadana del país vecino. Puede cruzar la frontera sin problemas y trabajar en los ranchos más alejados donde se suele cobrar más. *Los trabajadores sin papeles no se aventuran más allá de Las Cruces, nos cuenta, pues a partir de allí los controles se intensifican.* Cuando Irma llega a casa a las 4 de la tarde solo tiene fuerzas y tiempo para ducharse y cenar antes de acostarse. Es su marido Gustavo el que se ocupa de todo en la casa, también de su hijo Marcos de 27 años que sufre una grave discapacidad física.

Asegura que recoge la misma cantidad de botes que muchos hombres y que algunos días, si la cosecha es abundante y el chile

de buena calidad, llega a ganar 100 dólares. Pero este salario no llega para mucho después de descontar su aportación al seguro y todos los gastos familiares. Su hijo Marcos necesita atención especializada y medicinas que a menudo no puede costear.

Este fenómeno de migraciones y desplazamientos de los trabajadores del campo no es exclusivo de la frontera estadounidense. Las economías desarrolladas han experimentado un aumento en la demanda de mano de obra para mantener la competitividad económica sobre todo en sectores como el agrícola en los que su propia población, con mayor cualificación, proyección y expectativas, ya no quiere trabajar. Al mismo tiempo las naciones en desarrollo disponen de una oferta permanente de trabajo que favorece la inmigración. Un flujo internacional de mano de obra que ha venido a sumarse al de los productos y los capitales. No obstante, cuando hablamos de movimientos de personas hay que prestar especial atención a la situación de vulnerabilidad a la que se ven abocadas y a las dificultades añadidas a las que se enfrentan los trabajadores en los desplazamientos internacionales.

En este sentido la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales aprobada en diciembre de 2018 establece el compromiso de los Estados para facilitar la libertad de circulación de los campesinos y para solucionar los problemas de los trabajadores en zonas rurales que crucen fronteras internacionales.

La protección de los derechos humanos de estos trabajadores, así como un marco de trabajo legal que garantice condiciones laborales y salarios dignos evidencian el nivel democrático del país receptor y sin duda favorecen la cohesión social ya que contribuyen a erradicar la desigualdad y la discriminación.

Ser campesino si estalla la guerra.

Se estima que, en los últimos tres años más de cien millones de personas han sido víctimas de crisis alimentarias, una situación que amenaza con extenderse a otros 143 millones de personas que están a un paso de enfrentarse a la hambruna aguda.

Poner en contexto los motivos que provocan esta realidad exige hablar de la guerra y de cómo la alimentación se ha convertido en un vector sobre el que dirigir la violencia. No en vano, dos tercios de las personas que padecen hambre aguda en el mundo se encuentran en países sumidos en conflictos armados. En el epicentro de esta violencia encontramos al campesinado que ve convertido su trabajo en objetivo y su territorio en campo de batalla. Yemen o Sudan del Sur son dos claros ejemplos de estas circunstancias.

Tras seis años de guerra Yemen sufre una hambruna devastadora, la peor crisis humanitaria del planeta en los últimos 100 años, según Naciones Unidas, con trece millones de personas en riesgo de inanición.

En 2017 el Programa Mundial de Alimentos denunciaba que la alimentación se había convertido en un arma de guerra en el que ya era el país más pobre de Oriente Medio antes del inicio del conflicto. Dos años después, en septiembre de 2019, un informe de la Naciones Unidas responsabiliza directamente a las partes en conflicto sobre la situación humanitaria en Yemen, afirmando que *“la privación inhumana a la población yemení de sus derechos a las medicinas, el agua y la comida debería detenerse de inmediato”*.

En dicho informe se caracteriza y condena la instrumentalización del hambre como método de guerra. A este respecto, no debemos olvidar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, establece el derecho

fundamental a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegidos contra el hambre.

La información que nos llega sobre la guerra en Yemen no recoge la situación que atraviesa la población rural yemení que representa un 63% del total. A pesar de que algunas de las batallas más mediáticas han sido urbanas (como el asedio de Taiz o la batalla por Houdeida) la guerra y el desplazamiento en Yemen no son de naturaleza urbana, sino que son acordes a la condición rural del país. Tanto es así que el 68% de los episodios bélicos tienen lugar en zonas rurales y el 69% de los desplazados por la guerra provienen de estas áreas.

Los testimonios de estas víctimas olvidadas, que tradicionalmente han vivido de la agricultura y la ganadería, cultivando cereales, frutas y verduras, ilustran la sistematización de la violencia. Desde el inicio de la guerra en 2015 los campesinos del norte del país han denunciado los ataques reiterados de la coalición liderada por Arabia Saudí sobre sus granjas, campos y cosechas imposibilitando la producción local y dificultándola a futuro por la alta toxicidad que provocan sus bombardeos sobre la tierra. Una práctica perversa que ha aniquilado la economía rural y la forma de vida de gran parte de la población yemení que se ha visto obligada a huir a la ciudad y que encarna la hambruna que vive el país.

Los esfuerzos militares de ambas partes en conflicto por controlar el puerto de Hodeida, el principal del país en el mar Rojo, demuestran la importancia estratégica del control sobre los abastecimientos de un país como Yemen que importa el 90% de sus alimentos a través de sus muelles. Un control que supone además dominar la que, durante mucho tiempo, ha sido única vía de acceso de la ayuda humanitaria para los dos tercios de

la población yemení que vive en zonas bajo control de los hutíes.

Representa un claro ejemplo de esta estrategia el asalto que en junio de 2018, y desoyendo todas las advertencias de Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales, lanzaron las fuerzas de la coalición liderada por los saudíes sobre este estratégico enclave, hasta ese momento bajo el control hutí. Con esta acción militar pretendían cortar el abastecimiento al enclave noroccidental en manos de los hutíes, asfixiarlos económicamente y forzar su rendición. Lejos de lograrlo las consecuencias fueron devastadoras al agravar aún más la situación de los civiles y la crisis humanitaria que sufría el país. A pesar de que en diciembre de 2018 ambas partes en conflicto firmaron en Suiza un acuerdo de alto al fuego en Hudeida que ponía en manos de la ONU el control del puerto, la situación en el norte del país no ha cambiado demasiado.

La guerra cronifica y acentúa las preexistentes desigualdades entre las zonas rurales y urbanas y sus pobladores. El acceso al agua y la electricidad ya eran deficiente antes de la guerra en todo el país, pero las zonas rurales se llevaban la peor parte. Tras cinco años de conflicto la situación ha empeorado y la brecha entre el campo y la ciudad es todavía mayor.

El desplazamiento interno es quizá la cara más dramática de esta suma de violencias. En el sur del país la ciudad de Aden acoge desplazados llegados de zonas rurales que sobreviven a duras penas en edificios abandonados de los suburbios o en pequeñas tiendas y asentamientos que salpican el cercano desierto de Omran.

No muy lejos de allí, en la pequeña ciudad de Lahj, un hospital sin personal médico ni medicinas acoge a los enfermos de la zona.

Los funcionarios públicos han estado años sin cobrar sus salarios y muchos se han visto obligados a abandonar sus puestos de trabajo. Es el propio director del hospital el que recorre las habitaciones visitando a los enfermos, muchos de ellos niños atendidos por sus madres. Pero poco puede hacer frente al desabastecimiento general y la falta de medios. La desnutrición infantil es una constante en todo el país. Tres millones de niños y mujeres embarazadas sufren desnutrición aguda y según la organización Save the Children 85.000 niños han muerto por inanición.

Una suerte similar sufre Sudán del Sur. En este país el 80% de la población vive en áreas rurales y su situación no es mucho mejor desde que en 2013, tan solo dos años después de la independencia de Sudan, estallara la guerra civil.

Se estima que el conflicto ha provocado 400.000 muertes, más de 4 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y la población de al menos dos estados sufre una terrible hambruna.

La violencia generalizada y el desplazamiento continuado durante estos años han perjudicado especialmente las actividades agrícolas, han restringido el acceso a los campos y han destruido la economía de subsistencia de la mayoría de los hogares. Según datos de la FAO la producción de cereales no ha dejado de disminuir y en 2018 fue 15% inferior a los cinco años anteriores.

Por si esta situación no fuera ya suficientemente grave para la población campesina, durante gran parte de 2017 el gobierno sur-sudanesí impidió deliberadamente la llegada de alimentos a una parte de la población civil, en lo que un informe de Naciones Unidas presentado ante el Consejo de Seguridad describía como “*acciones equivalentes a utilizar los alimentos como arma de guerra*”.

con la intención de infligir sufrimiento a los civiles que el gobierno considera opositores”. Según los relatores “la negación de la ayuda humanitaria había causado una inseguridad alimentaria extrema entre grandes sectores de la población, con desnutrición y muerte por inanición en el área de Greater Baggari en el condado de Wau”.

Pero la inseguridad alimentaria no es la única consecuencia para la población campesina. Décadas de conflicto han convertido casi 90 millones de metros cuadrados en tierra con peligro de explosión. Unos 6 millones de personas en Sudán del Sur viven en áreas con presencia de minas terrestres y restos explosivos de guerra. Esto supone un enorme riesgo para los habitantes de las zonas rurales que deben cultivar campos o circular por caminos plagados de minas.

En Ecuatoria Oriental, muy cerca de la frontera con Uganda, se encuentra el campo de desplazados de Melijo. Dos mil personas, la mayoría procedentes de Bor, en el Estado de Jonglei, han ido llegando desde el inicio de la guerra en 2013. Todos ellos eran campesinos y muchos sufren mutilaciones a causa de la explosión de minas terrestres cuando trabajaban en el campo. Otros resultaron heridos por disparos al verse rodeados por los enfrentamientos o perdieron la visión por los efectos de los bombardeos.

A las campesinas y campesinos que me abrieron sus casas y sus vidas y compartieron conmigo un puñado de tierra: gracias. En todas las personas que aparecen en este libro vi reflejada mi infancia y la vida de mi familia. De ellas aprendí que la tierra es un vínculo que acorta distancias temporales, geográficas y culturales.

A Susana Blasco y Chema Conesa por su talento, sensibilidad y complicidad imprescindible.

A las personas, instituciones y organizaciones que creyeron en Matria y me han ayudado en este camino largo y maravilloso hasta llegar aquí.



